TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CUNDINAMARCA
SALA CIVIL – FAMILIA

MAGISTRADO PONENTE : PABLO IGNACIO VILLATE MONROY
CLASE PROCESO : RESOLUCIÓN CONTRATO DE COMPRAVENTA
DEMANDANTE : NIXON JAVIER OLIVAR CANTOR
DEMANDADO : ASOCIACIÓN DE VIVIENDA POPULAR DE LA
PROVINCIA DEL SUMAPAZ ASOVIP Y OTRA
RADICACIÓN : 25290-31-03-002-2018-00043-01
DECISIÓN : REVOCA AUTO

Bogotá D.C., dos de octubre de dos mil veinte.

Decide el Tribunal a continuación el recurso de apelación formulado por la parte demandada a través de su apoderado, contra la providencia dictada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Fusagasugá, el día 15 de julio de 2020, a través de la cual se negó el decreto de la prueba testimonial solicitada por dicha parte.

I. ANTECEDENTES:

1. Mediante auto dictando en audiencia de fecha 15 de julio de 2020, el señor Juez de primera instancia negó la prueba testimonial solicitada por el apoderado de la parte demandada en la contestación de la demanda, pues consideró que no se indica sobre qué hechos concretos de la demandada y contestación deben declarar los testigos solicitados, por lo que no se cumple con los requisitos del artículo 212 del C.G.P.
2. Contra esta decisión la parte demandada a través de su apoderado, formuló recursos de reposición y apelación, sustentados en que los testigos citados rendirán su versión sobre los hechos de la demanda,

RESOLUCIÓN DE CONTRATO de NIXON JAVIER OLIVAR CANTOR contra
ASOCIACIÓN DE VIVIENDA POPULAR DE LA PROVINCIA DEL SUMAPAZ Y OTRA.

los cuales fueron enumerados, así como de la contestación a la demanda, por lo que se cumple con el presupuesto establecido en el artículo 212 del C.G.P., es decir, enunciarse concretamente los hechos de prueba, máxime cuando los testigos son asociados de la demandada y tiene conocimiento de su administración y pormenores de la licencia del terreno objeto de compraventa.

Negada la reposición se concedió el recurso subsidiario de apelación, el cual procede el Tribunal a resolver.

II. CONSIDERACIONES:

El principio universal de la necesidad de la prueba previsto en el artículo 164 del Código General del Proceso, impone a las partes de un determinado litigio, el deber de presentar al juez que conoce de la contienda, los medios de convicción necesarios que le permitan definir con meridiana claridad el derecho sustancial controvertido por las partes, pues recuérdese que *“Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso.”*

La necesidad de presentar medios de convencimiento de la existencia del hecho histórico que motivó el conflicto que debe ser resuelto por el juez, permite a las partes dentro de las oportunidades legales solicitar diversos medios de prueba que faciliten esa labor de convencimiento. Por esta razón, puede decirse que el régimen probatorio que gobierna nuestro ámbito jurídico, goza de gran amplitud en la medida que ofrece al juez y a las partes la posibilidad de agotar diversos medios para demostrar un hecho, salvo en los casos en que la ley exige la presencia de una prueba determinada (prueba solemne).

El régimen probatorio sin embargo, se rige por esenciales principios como el de oportunidad y regularidad y fija un mínimo de requisitos para ordenar su práctica, como la eficacia y pertinencia frente al hecho que se pretende probar, haber sido solicitada de manera oportuna y cumplir las formalidades establecidas por la ley para la petición de la prueba.

El artículo 212 del Código General del Proceso, al regular la petición y limitación del testimonio, señala que: *“Cuando se pidan testimonios deberá expresarse el nombre, domicilio, residencia o lugar donde pueden ser citados los testigos, y enunciarse concretamente los hechos objeto de la prueba.”*

Es decir, no basta solicitar el testimonio de personas, sino que adicionalmente la parte interesada en la prueba, al momento de solicitarla, deberá indicar además del nombre, domicilio, residencia o lugar donde puede ser citado el testigo, enunciar concretamente los hechos que pretende probar con el testimonio, pues a partir de tal enunciado es posible que el juez califique la pertinencia, conducencia y utilidad de la prueba y proceda a su decreto, o a su rechazo, en los términos del artículo 168 del Código General del Proceso.

En el asunto de que se trata, la parte demandada en la contestación de la demanda, solicitó el testimonio de ARNULFO BELTRÁN URREA, MAGNOLIA YASMÍN MORA RODRÍGUEZ, MARÍA DORIS RINCÓN PINZÓN FRANCISCO ANCÍZAR ACOSTA MORENO y ENRIQUE DE JESÙS ACOSTA URREGO, indicando que *“Todas estas personas son idóneas para declarar, y rendirán su testimonio respecto de los hechos de la demanda y su contestación, pues se trata de asociados los cuales podrán dar a conocer al proceso hechos de relevancia, y su testimonio es útil procedente, pertinente y conducente”*.

El fundamento fáctico de la demanda consta de diversos hechos, relativos a la compraventa de un inmueble y el incumplimiento de las obligaciones por parte de los demandados, entre ellas el loteo del predio; por su parte los demandados al replicar la demanda, proponen las excepciones de mérito de prescripción y falta de legitimación en la causa por activa.

Luego, resulta claro que la parte demandada al referirse a los hechos de la demanda y su contestación definió los hechos concretos objeto de prueba frente a los cuales se va a indagar a los testigos, pues innecesario resulta que haga una transcripción de los mismos; resalta el Tribunal, que la negativa de la prueba testimonial, desconoce los principios de necesidad y carga de la prueba y el derecho de defensa de la parte demandada.

Se sigue de lo dicho, que la prueba pretendida cumple con los presupuestos del artículo 212 del C.G.P., razón por la cual la providencia apelada será revocada, para que el señor Juez de primera instancia proceda a decretar y practicar la prueba testimonial solicitada.

Sin costas por haber prosperado el recurso (art. 365-1 del C.G.P.).

III. DECISIÓN:

Congruente con lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, **REVOCA** el auto apelado, esto es, el proferido Juzgado Segundo Civil del Circuito de Fusagasugá, el día 15 de julio de 2020 y en su lugar,

RESUELVE:

RESOLUCIÓN DE CONTRATO de NIXON JAVIER OLIVAR CANTOR contra ASOCIACIÓN DE VIVIENDA POPULAR DE LA PROVINCIA DEL SUMAPAZ Y OTRA.

PRIMERO: ORDENAR al señor Juez Segundo Civil del Circuito de Fusagasugá, que proceda a decretar y practicar la prueba testimonial solicitada por el apoderado de la parte demandada.

SEGUNDO: Sin costas. En firme este auto, devuélvase el expediente a su lugar de origen.

CÓPIESE Y NOTIFÍQUESE

Pablo I. Villate M.
PABLO IGNACIO VILLATE MONROY
Magistrado